

## Dos mujeres en el siglo xx

La intención de este libro fue registrar de primera fuente el testimonio de dos protagonistas del feminismo del siglo xx: Gina Vargas y Maruja Barrig. La primera, vinculada con una de las organizaciones de mujeres que perdura desde su fundación hace cuarenta años —el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán— y la segunda, dedicada de manera independiente a la investigación y el activismo en torno a la condición social de las mujeres. Ambas coincidieron en el mismo centro de estudios en sus años de formación y luego, a partir del feminismo como espacio de encuentro surgido en el Perú a fines de los años setenta, cultivaron una amistad hasta el día de hoy.

Este libro también busca tender puentes entre el feminismo del siglo pasado y el del presente. Entre las tendencias actuales y la experiencia feminista en un difícil contexto de

postdictadura militar, conflicto armado, crisis económica, Estado neoliberal y autocracia, que la memoria de lo digital no ha registrado lo suficiente.

El proyecto de escritura nos llevó año y medio, y consistió en una decena de entrevistas a Gina Vargas y Maruja Barrig, juntas y por separado. En medio, nos sorprendió la pandemia. La idea de llevarlo a cabo surgió también de saberme en una posición de bisagra generacional: entre el feminismo en el que me inicié y los feminismos actuales. Algo que compartí con ambas desde aquel entonces fue el deseo de justicia social en un país como el Perú, con una escasa cultura democrática y un terco autoritarismo. Quizás porque tanto ellas como yo recibimos una formación que priorizó la lucha contra la pobreza, a la que luego se sumó el entendimiento de que las más pobres y afectadas por la desigualdad eran las mujeres. Y quizá para las *millennials* post Guerra Fría muchos de los vocablos que marcaron el siglo pasado signifiquen hoy otra cosa, y así, los pobres sean *losers*; los precarios, emprendedores; y los ciudadanos, consumidores. Tal vez se crea que el feminismo radica principalmente en la eliminación de la violencia en la pareja o la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pues en cuanto a lo económico no hay alternativas al sistema.

En lo personal, la primera vez en que oí hablar de feminismo, a inicios de los años ochenta, no presté mucha atención. Ya había terminado el gobierno militar con sus reivindicaciones por la mujer e imaginé que se trataba de algo ya instalado. Lo que no llegaba a ver fue que mi mundo era solo una burbuja. Mi madre era una alta funcionaria en el Estado, muy activa a nivel gremial: llevaba a solas un hogar y me obligaba a pensar como adulta. Yo había estudiado en un

colegio de mujeres que ponía énfasis en una educación política y estaba en la universidad, donde buena parte del alumnado eran mujeres.

Llegué como practicante a la oficina legal de Centro de la Mujer Flora Tristán en 1984, gracias a la invitación de Gladys Acosta, entonces su directora y mi compañera de carpeta en la universidad. En Flora encontré tanto a mujeres que diseñarían políticas públicas como a escritoras e investigadoras en humanidades. Ahora todos esos nombres son conocidos: Silvia Loli, María Isabel Rosas, Giulia Tamayo, Mariella Sala, María Emma Mannarelli, Marcela Huaita, por citar algunos.

Si hay algo que agradezco al feminismo es no solo su propuesta política —que amplía los términos de una democracia—, sino sobre todo su contribución a una nueva modelación de los géneros. Yo, que creía que el mundo «era de las mujeres», pude interpretar y leer mi propia vida como mujer gracias al feminismo. Había empezado mi época escolar en 1970, casi a la par de la reforma educativa del gobierno de Velasco, en uno de los colegios «piloto» de dichos cambios. Era un colegio dirigido por religiosas, como la mayor parte de colegios privados, y por aquella época bajo el influjo del progresismo de la Iglesia católica. Su visión era la de formar a las alumnas «agentes de cambio social» y para esto el conocimiento del Perú y su problemática social debía darse a profundidad. Sin embargo, poco valió el aprendizaje intensivo frente a los mandatos familiares de la clase social. Recuerdo que a los seis años llamó mi atención la incapacidad de las niñas para ir oportunamente al baño y «hacerse la pis», lo que yo entendía como un signo de fragilidad femenina. O, años más tarde, cuando en un curso sobre realidad nacional empezábamos el estudio de los *Siete ensayos*

*de interpretación de la realidad peruana* de José Carlos Mariátegui y repentinamente una asamblea de padres de familia censuró la lectura y pasamos el año tejiendo enterizos de bebé. El proyecto de realización personal para la mayoría de chicas era casarse al terminar el colegio, a una edad tan corta para asumir las cargas familiares sin recursos propios que las volvía aún más vulnerables. Luego, a medida que avanzaba la edad, se acentuaba un fervor religioso que antes no se había hecho presente. Mi experiencia personal había sido distinta. De alguna manera el feminismo me permitió ver que no todas las mujeres respondían a un mismo modelo y que yo, el patito feo sin listón rosado en el cuello, podía convertirme en un cisne, aunque mi propia vida no estuviese tan libre de violencias de género como pensaba.

Uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI, por su envergadura internacional y por sus propuestas, ha sido la consolidación de los movimientos feministas en un mundo aparentemente apaciguado por el dominio del capitalismo y la «libertad de elección» del mercado, pero donde aún subyace el trabajo invisible de los cuidados domésticos llevado a cabo por las mujeres. Un mundo en el que las brechas históricas entre hombres y mujeres son todavía evidentes, y nuestros derechos civiles no terminan de estar garantizados. Se avanza, sin duda, pero a contracorriente.

Nada de lo que ocurre hoy habría sucedido sin los desarrollos del siglo pasado, en el que los movimientos de mujeres buscaron el reconocimiento de su autonomía intelectual y política. Desde el siglo XIX se gestó una lucha por el sufragio, derecho que se consiguió en el Perú solo en 1955 para las

mujeres que sabían leer y escribir. Las analfabetas quedaron de lado hasta 1979. Una lenta democratización avanzaba en el país durante el siglo xx, interrumpida por sucesivas dictaduras militares y con una persistente exclusión de grandes sectores de la población. Las jóvenes de clase media que tenían veinte en los años sesenta vivieron los cambios sociales que habían afectado a las mujeres en los países centrales de Occidente. La generación anterior había ingresado en mayor número al mundo laboral, mermado por la partida de los hombres a las guerras mundiales en Europa y los Estados Unidos. La filosofía había desarrollado nuevas miradas y nacían los derechos humanos proclamando igualdad y legalidad mínimos para todo ser humano. Esta vez las mujeres no quedarían excluidas de la Declaración de 1948, a diferencia de la primera Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano forjada durante la Revolución francesa, con la que se había fundado el Estado moderno dejando sin ciudadanía a la mitad —femenina— de la población.

Uno de los textos filosóficos de mayor impacto a mediados del siglo xx fue *El segundo sexo* de Simone de Beauvoir, publicado en Francia en 1949, siguiendo la línea del existencialismo y como crítica al mismo. Beauvoir y su compañero, Jean-Paul Sartre, fueron a la vez un modelo de pareja y de vida para la juventud de los años cincuenta y sesenta.

Hacia 1963, con el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Perú trató de enrumbarse hacia una política de reformas sociales que fracasó. Se prosiguió al margen de la inclusión de grandes sectores de la población sumida en el analfabetismo y en relaciones económicas aún coloniales. Un panorama semejante no era propicio para avances en materia de derechos

humanos y, en particular, de las mujeres. El ámbito latinoamericano estaba sacudido por el éxito de la Revolución cubana del año 59 y las guerrillas en cada país trataban de seguir el ejemplo. Sacerdotes de la Iglesia católica como Gustavo Gutiérrez reinterpretaban el Éxodo, la liberación del pueblo de Israel, en función de las realidades locales, predicando un cambio estructural para nuestros países y la superación de la injusticia social. Jóvenes católicos o izquierdistas trataban de seguir el camino de la guerrilla o buscaban la convivencia con los pobres. No obstante, las reformas económicas que acabaron con lo que quedaba del orden semifeudal no serían dadas por el gobierno de Belaúnde, sino por el gobierno —autodenominado «revolucionario»— de las Fuerzas Armadas del general Juan Velasco Alvarado, que llegó al poder en 1968. Un año antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas había adoptado la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un antecedente de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) llevada a cabo en 1979. El mundo giraba en ese sentido, y en 1975 se realizaría la primera de cuatro Conferencias Mundiales de la Mujer, organizadas por las Naciones Unidas.

Sin duda, el contexto familiar y social que rodeaba a Gina Vargas y a Maruja Barrig era propicio para la reflexión sobre el ser mujer. El padre de Gina fue uno de los generales del Ejército que había emprendido la revolución velasquista; y el de Maruja, un militante del Partido Comunista Peruano. Ambas estudiaban en la Universidad Católica en un período marcado por la muerte de un alumno de Letras en 1963, el poeta Javier Heraud —que había dejado las aulas para enrolarse en la

guerrilla latinoamericana—, y por la muerte del «Che» Guevara, en 1967. Las mujeres no eran mayoría en la universidad ni en el mercado laboral, pero sí en la economía informal y aquella con los salarios más bajos, o en ocupaciones que eran una extensión de la actividad doméstica: cocinar, lavar, coser, limpiar, cuidar de otros.

El destino de Gina y Maruja tendría que haber sido el del hogar de clase media, dedicado a la vida familiar convencional (que incluye pareja e hijos). Un destino guiado por una mitología perteneciente a su medio social, que las obligaba a creer en el amor romántico y en el matrimonio hasta la muerte, así como en la importancia de adecuar el cuerpo a la mirada ajena (ya sea a través del cuidado de la postura o la práctica de danza). Ambas se enfrentarían a estos condicionamientos. Asimismo, el convulso contexto nacional ejercería una enorme influencia en sus decisiones y marcaría su vocación: ambas se embarcarían en carreras de impacto social, una en la sociología; la otra, en el periodismo.

En medio de una serie de transformaciones nacionales, surgieron a inicios los años ochenta los primeros grupos feministas. Asimismo, fruto de las reformas del Estado y del crecimiento de los movimientos sociales, la Constitución de 1979 dio el voto universal a todos los connacionales, hombres y mujeres, supieran o no leer y escribir. Así se cerraban doce años de dictadura militar nacionalista, autoritaria y de capitalismo estatal, que de alguna manera habían socavado el imaginario conservador de aquel entonces. El Plan Inca de la «Revolución Peruana», dado a conocer en 1974, reconocía en su artículo 23 la situación de desigualdad material de la mujer respecto del varón —en el ámbito laboral, civil y económico— y planteaba

acciones para revertirla. Al cambio de la Constitución siguió la renovación de una serie de instrumentos legales como los Códigos Civil y Penal, que variarían las normas referentes a la mujer en la familia y a los delitos sobre libertad sexual.

Los años setenta se dividieron entre el gobierno militar de Velasco y el de Morales Bermúdez, a partir de 1975. El país estaba rodeado de sanguinarias dictaduras militares de derecha en Chile, Argentina, Brasil y Bolivia. No era fácil pensarse en términos de libertades, más aún si se iba a contracorriente del Gobierno. La libertad de expresión en la prensa estaba seriamente limitada. El otro ejército era la Iglesia católica, unas veces en apoyo a las dictaduras latinoamericanas y otras haciéndoles resistencia. Ejército e Iglesia eran las instituciones tutelares en América Latina y establecían un comportamiento sometido a jerarquías. Si a esto le sumábamos el racismo y sexismo existentes, el resultado es una matriz social acentuadamente autoritaria y represiva. No era de extrañar que el común de los peruanos no supiéramos el ABC de la cultura política (qué es la izquierda o la derecha, en qué consiste la consciencia de clase y qué otras ideologías existen fuera del comunismo). En un contexto así de hostil al diálogo horizontal entre ciudadanos, la existencia de movimientos sociales organizados que expresaran una voluntad popular fue bastante limitada. El feminismo surgido a fines de los años setenta apenas reunió a un puñado de mujeres y giró principalmente en torno a una plataforma institucional para poder continuar desarrollando el movimiento.

Las elecciones para la Asamblea Constituyente del año 78 darían color al aplastante panorama de los uniformes, sin embargo, pese a los aires democráticos, el régimen militar



seguía deportando a sus oponentes políticos. La novedad, luego de las elecciones, fue la aparición de un nuevo bloque en el poder asambleísta que representaba un tercio de los votos. La izquierda peruana, conformada por diversos partidos pequeños, se había fortalecido en medio de las protestas populares iniciadas con el primer paro nacional en julio de 1977. La nueva Constitución levantaba algunas propuestas chocantes para la parte más conservadora de la población en tanto decidía el voto para los analfabetos, el reconocimiento familiar de las uniones de hecho, el derecho a la huelga y a la insurgencia en defensa del orden constitucional, el uso de la propiedad en armonía con el interés social y la orientación del capital extranjero hacia el desarrollo nacional bajo la supervisión estatal. A su vez, mientras los primeros grupos feministas iniciaban su trabajo en la capital alrededor de 1978 y 1979, de las entrañas del país surgían fuerzas que declaraban la guerra a la democracia representativa y al «Estado burgués», pues consideraban insuficiente cualquier reforma social. Entretanto, la extrema izquierda preferiría las armas a la participación en las urnas y la izquierda legal se uniría en una Alianza Revolucionaria que luego se fraccionaría y perdería las elecciones de 1980. Reconciliada como Izquierda Unida y sin comprender totalmente las luchas antipatriarcales, el partido llevaría a dos feministas —Gina Vargas y Vicky Villanueva— a ser candidatas en las elecciones generales de 1985, ganadas por el Apra.

En la década de los noventa, un movimiento político y económico puso de un lado a la clase empresarial desde el Estado y, del otro, a los ciudadanos de a pie. Dirigido desde Washington y Londres, el mundo occidental empezaría a dar un giro hacia el debilitamiento del Estado como inversionista

y dueño de recursos nacionales. Se asentaba un gran poder económico transnacional. En el mismo sentido, el Vaticano reformulaba la orientación de la Iglesia católica hacia una rerromanización conservadora y poco ecuménica. Al final de la década, los referentes del socialismo como la URSS se disolvían y, con ello, su función de contrapeso en la balanza ante los excesos del capitalismo.

Gina y Maruja representaron dos posiciones distintas en cuanto a la ubicación del naciente feminismo de los años ochenta: a distancia de los partidos políticos de izquierda. Este debate ya había tenido lugar en los setenta entre las integrantes del feminismo radical norteamericano. No había una fácil disposición de las agrupaciones de izquierda para discutir sobre asuntos específicos a la opresión de las mujeres —como la violencia doméstica o la feminización de los cuidados—. Y es que acabar con el capitalismo o la propiedad privada no aseguraba liberar a las mujeres si no se atacaba la desigualdad respecto de los hombres. No se trataba de un problema individual a solucionar en la pareja sino, como señalaban las feministas materialistas, de reconocer que había una apropiación física de la mujer: una apropiación de su tiempo, de su independencia —obligadas a cuidar de otros— y de su capacidad procreativa —sin derechos sexuales y reproductivos—, lo cual la hacía vulnerable de violencia física y sexual.

Las distintas posiciones suscitaron un fuerte debate al interior del movimiento feminista conformado también por algunas exmilitantes de partidos de izquierda que optaron por liderazgos alejados de la sombra de sus pares masculinos. La izquierda peruana no alcanzó a superar el falso dilema de priorizar la pobreza del país antes que atender a las demandas

específicas de las mujeres, reputándolas como extrañas a los sectores populares, dividiendo así lo que tendría que ir junto: la lucha contra la explotación en las relaciones productivas, pero también en las relaciones reproductivas.

Los ochenta fueron años de interpelación a los grupos feministas para que respondan a la realidad en las regiones, en tanto que ya se hablaba de «terrorismo» y «guerrilla» desde inicios de la década. Aún no se conocía muy bien la naturaleza del grupo que insurgía en el entonces aislado y empobrecido departamento de Ayacucho, pero ya en 1981 un decreto legislativo tipificaba el delito de terrorismo, mientras que en agosto de 1982 se declaraba el Estado de emergencia en todo el país y 1983 —el mismo año en que se llevaría a cabo, en Lima, el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe— se iniciaba con la toma del control interno por las Fuerzas Armadas en cinco provincias de Ayacucho. En 1984, a las acciones de Sendero Luminoso se sumarían las de un segundo grupo armado, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La violencia y la crisis económica de esos años debilitaron los espacios de encuentro de las mujeres y sus colectivos, a la vez que impactaron en el cotidiano de las que pertenecían a sectores populares y al movimiento sindical. Las ONG pudieron subsistir gracias a los fondos de la cooperación internacional y se organizaron en torno a un trabajo más bien tecnocrático pues los tiempos eran difíciles para una articulación como movimiento social. Estos rasgos se acentuarían más en la década siguiente.

A partir de 1990, el Perú entró de lleno en la órbita mundial neoliberal en la que se encuentra hasta hoy, y en 1993 se hizo de una nueva Constitución resultante del autogolpe del

presidente Alberto Fujimori en 1992. Las privatizaciones de empresas públicas atrajeron capitales extranjeros al país, lo que fue posible debido a la crisis económica y de los partidos políticos que propició el voto por un *outsider*, quien gobernaría en alianza con el poder económico y las Fuerzas Armadas. El movimiento sindical, que fue protagonista de los años setenta, dejó de serlo en los noventa en favor del trabajador informal. Entre 1992 y 1997 se debilitaría el accionar de Sendero y del MRTA, lo que paulatinamente aseguraría a Fujimori en el poder bajo una falsa imagen de «vencedor del terror». El movimiento feminista solo generaría impacto a nivel estatal a través de las ONG impulsadas desde las Conferencias Mundiales de la Mujer de las Naciones Unidas. Su trabajo fue limitado por el control del Gobierno sobre la cooperación internacional y sus programas en barrios también sufrieron intimidaciones y asaltos de los grupos armados, a la par que atentados contra las mujeres de las bases populares, como el emblemático asesinato de María Elena Moyano.

Fujimori tendría una sucesión de tres gobiernos hasta 2001, manchados por corrupción y violaciones a los derechos humanos, así como por la ausencia de un Estado organizador de la sociedad. Su clientelismo tocó de diversas formas la puerta de las ONG feministas y desarticuló a las organizaciones de mujeres de sectores populares que dependían de los programas sociales de su gobierno. Él mismo se convirtió en el foco de atención de las causas de las mujeres al ser el único jefe de Estado en asistir a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing en 1995. Meses después, crearía el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), y ese mismo año entraría en funcionamiento la Comisión de la Mujer en el

Congreso. El deslinde con el fujimorismo, particularmente tras develarse los casos de esterilización forzada a mujeres campesinas quechuahablantes, llevó a la fundación de nuevas articulaciones y colectivos feministas como el MAM y Mujeres por la Democracia hacia el final del milenio.

Los feminismos de este siglo surgieron casi dos décadas después de la pandemia del VIH/sida, que reveló la negada existencia de la diversidad sexual y puso en cuestión al binarismo de los géneros. A diferencia del siglo pasado, que celebraba la libertad sexual gracias a la comercialización de la píldora anti-conceptiva en los años sesenta, las feministas de este siglo han enfocado su lucha en la denuncia contra la violencia. En este siglo, las redes virtuales se convirtieron en un espacio público de contienda y denuncia contra diferentes formas de violencia sexista —desde el incesto hasta el acoso—, señalando incluso a hombres en los más altos niveles de poder.

Los límites de la democracia representativa y la crisis del capitalismo impulsaron el protagonismo de las jornadas de protesta y acampadas de 2011 en España, Estados Unidos y los países árabes, un camino que luego seguirían las grandes manifestaciones feministas en todo el mundo. Si en el siglo pasado la lucha feminista en el Perú se había dirigido hacia el Estado y sus políticas públicas en pro del desarrollo económico y de la igualdad de derechos, en este siglo las activistas más jóvenes expresaron más bien un estado de ánimo desconfiando de la democracia, el poder gubernamental y las jerarquías, organizándose en asambleas autoconvocadas y actuando en los espacios públicos como la calle o la virtualidad, mientras que las mayores continuaban trabajando

desde instituciones no gubernamentales en interacción con el Estado.

El feminismo del siglo XXI se ha internacionalizado. En América Latina, feminicidios en marzo y mayo de 2015 dispararon las manifestaciones multitudinarias del 3 de junio convocadas por el colectivo Ni Una Menos en Argentina. Estas marchas se sucedieron en Perú en agosto de 2016, también en Chile y México, dejando instalados colectivos de mujeres que enfrentan la violencia patriarcal. En octubre de 2016, un paro nacional de mujeres en protesta por un proyecto de ley que prohibía toda causal de aborto fue acatado en Polonia; días después habría un paro nacional en Argentina como respuesta a la violación y el feminicidio de una joven, y como reclamo ante el trabajo doméstico no remunerado y las desiguales condiciones laborales que fragilizan a las mujeres. Meses después, como una sola clase social, las mujeres anunciaron el primer Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo de 2017, que se realizó en treinta países del mundo, incluyendo el Perú.

Las movilizaciones suscitaron el surgimiento de una serie de colectivos a nivel mundial, que han permanecido activos desde entonces trabajando en la proyección de su visión feminista en la sociedad. En mayo de 2018, varias universidades chilenas fueron tomadas para reclamar una «educación anti-sexista» que luego progresó hacia un significado antipatriarcal más integral: anticlesial, antimilitar y antineoliberal. La ampliación del significado de las luchas feministas en Chile también consiguió penetrar los planteamientos de una nueva Constitución en ese país, que ha llegado a tener la primera Constituyente paritaria del mundo. En octubre de 2019, el Encuentro Nacional de Mujeres que se venía celebrando desde

hacia más de treinta años en Argentina terminó ampliándose para ser un Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que exigió demandas a los candidatos a diez días de las elecciones presidenciales. La principal demanda fue volver a debatir un proyecto de ley de despenalización del aborto. Es más, el mismo presidente electo planteó la iniciativa de ley de legalización de la interrupción del embarazo sin causales que fue aprobada en diciembre de 2020.

La pandemia del COVID-19 ha agravado la situación del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, por lo que los sistemas de cuidado han sido parte de las discusiones de los organismos multilaterales. Sin duda, el trabajo doméstico atañe a la inserción injusta de las mujeres en un sistema económico que no reconoce beneficios a un trabajo que, sin embargo, nutre de recursos tanto a lo público como a lo privado<sup>1</sup>.

En el Perú, a la par de este tiempo no valorado que empobrece a las mujeres, una serie de desigualdades sociales ocasiona a su vez otras fracturas en la población femenina. Las condiciones de vida más precarias se concentran en los grupos de mujeres racializadas, que reciben trabajo doméstico «tercerizado» por otras mujeres, confirmando que pese a ser una

---

1 Nancy Fraser y otras feministas expresan así la problemática del trabajo doméstico no remunerado: «(...) el capitalismo no inventó la subordinación de las mujeres. Existía en diversas formas en todas las anteriores sociedades de clases. Pero el capitalismo estableció nuevas formas de sexismo distintivamente “modernas”, respaldadas por nuevas estructuras institucionales. Su jugada clave fue separar la producción de seres humanos de la producción de beneficios, asignando la primera tarea a la mujer y subordinándola a la segunda. (...) Lejos de ser valorada por derecho propio, la reproducción de la vida se trata como un mero medio para la producción de beneficios». El binarismo de los géneros mantendría esa división entre trabajo reproductivo y productivo. Prueba de ello serían las propuestas políticas conservadoras empeñadas en la rigidez de los roles masculino y femenino en el seno de la familia tradicional que a su vez preconizan una libertad extrema a la inversión capitalista. En el libro *Manifiesto de un feminismo para el 99%*, de Nancy Fraser (Herder, Barcelona) en 2019.

república de doscientos años, la pirámide colonial «de raza» continúa presente. Son estas fracturas sociales las que hacen que, si bien temas como la violencia física y sexual provocan consenso y conforman una amplia base social en su entorno —alentada por las redes sociales y los medios de comunicación—, a mayor base social, más dificultades de integración tenga el grupo y menor sea la profundidad de la respuesta consensuada. La estructura piramidal de la sociedad peruana complica la formulación de una agenda común donde las necesidades de las mujeres de diversos estratos se reflejen.

Hasta el momento, en el Perú, la violencia ha tenido por respuesta la tipificación de nuevos delitos y el aumento de penas carcelarias. Este resultado podría conducir a un debilitamiento del feminismo al separar la violencia de género del conjunto de violencias estructurales. De esta manera, un gobierno corrupto, expoliador de los recursos ambientales o de los trabajadores, o que incurriese en cualquier otro tipo de violencia, podría fácilmente «tranquilizarnos» con medidas progresistas contra la violencia machista. Todo esto nos lleva a preguntarnos sobre los parámetros del feminismo de este siglo y la necesidad urgente de hacer de él un abordaje político integral contra las distintas formas de opresión que siempre pusieron en peligro la categoría de ser humano de la mujer. Mientras algunas izquierdas desconocen los enfoques de los feminismos radical, materialista, anticapitalista, comunitario o decolonial, por mencionar algunos; las derechas sostienen que los feminismos son parte del «neomarxismo». Esto es: un acomodamiento del propio marxismo desde banderas culturales debido al fracaso del socialismo como política de Estado el siglo pasado. En realidad, fueron los propios límites



del marxismo los que permitieron el fortalecimiento del feminismo que extendió, por ejemplo, el análisis de la economía productiva a la economía reproductiva y de la feminización de las tareas domésticas desde la infancia a cambio de una recompensa moralizante.

El feminismo nacido en Europa y Estados Unidos se diversificó según su circunstancia histórica, ampliando sus luchas desde el punto de vista de distintas actoras descentralizadas. En América Latina surgió un feminismo decolonial, un feminismo comunitario, un ecofeminismo. La raza, la clase, los géneros, las sexualidades y los cuerpos son variables que tienen que combinarse en el análisis para ampliar el espectro de lo político y sus formas de ejercicio, que van de lo micro a lo macropolítico. El deterioro de las condiciones de vida a nivel mundial, el desastre ecológico, la concentración de la riqueza en manos de privados gracias a los Estados y a la especulación financiera —fortunas que se multiplicaron fácilmente durante la pandemia— hacen que las mujeres intervengamos activamente en la propuesta de un nuevo orden.

De ahí la importancia de echar luz sobre la experiencia de vida de Gina y Maruja, y articular así cierta genealogía de la lucha feminista en nuestro país. Por ello, agradezco el buen humor y la persistencia de ambas, y al tiempo que se tomaron para llevar este proyecto conjunto a término.

Violeta Barrientos Silva  
*Lima, mayo de 2021*